

Bajo el rótulo de “procedimiento anual”

Cómo el cierre del SAPU 18 de Septiembre desnudó la fragilidad de la salud municipal

● Mientras Salud y Cormupa atribuyen el cierre a retrasos en convenios y restricciones de Contraloría, la ciudadanía denuncia una gestión ineficiente y recortes de personal que profundizan la precariedad del sistema.

Fernando Cumare

fcumare@elpinguino.com

EP PÁGINA WEB

Lo que para la autoridad es un “procedimiento administrativo anual”, para los vecinos de la zona sur de Punta Arenas es una vulneración directa a su derecho a la salud.

El cierre temporal del SAPU 18 de Septiembre mantiene encendidas las alarmas, no solo por la falta de atención inmediata, sino por lo que revela sobre la fragilidad del sistema de financiamiento de la Atención Primaria de Salud (APS).

La respuesta oficial: atados de manos por la burocracia

Tanto el Servicio de Salud Magallanes como

la Corporación Municipal (Cormupa) han intentado instalar una narrativa de normalidad institucional.

Según la minuta oficial, el retraso en la transferencia de recursos asociados a los Programas de Reforzamiento (PARPS) es una constante histórica debido a los procesos administrativos entre el Ministerio, el Servicio y las Corporaciones. Sin embargo, este año el escenario cambió radicalmente.

Durante años anteriores, la Cormupa lograba dar continuidad a las prestaciones mediante el uso de otros recursos de salud durante los

primeros meses, pero en el presente periodo dicha práctica fue observada por la Contraloría General de la República, lo que imposibilita legalmente su aplicación actual.

Mientras el Servicio de Salud y la Cormupa culpan a la burocracia y a las nuevas trabas de Contraloría por la falta de recursos, la comunidad denuncia una realidad mucho más grave: una red de salud dismantelada entre desvinculaciones de personal y una gestión de fondos que no toma previsiones.

Víctor Fuentes, jefe del área de Salud de la Cormupa, enfatizó que la reactivación depende exclusivamente de la llegada de los fondos ministeriales, asegurando que una vez recepcionado el acto administrativo se procederá de forma inmediata a la suscripción de convenios.

Mientras tanto, la corporación sostiene que realiza un esfuerzo con recursos

propios para mantener operativos el resto de los dispositivos.

¿Gestión técnica o negligencia política?

A pesar de que las autoridades han dispuesto medidas de mitigación para asegurar la continuidad de la atención, el descontento social en redes sociales apunta a un problema de fondo sobre la priorización de los recursos.

La ciudadanía percibe una desconexión total con la realidad desde todos los niveles del Estado, manifestando una profunda desconfianza en la administración de fondos.

Las denuncias ciudadanas vinculan la falta de presupuesto en salud con escándalos de “fugas de dinero” a fundaciones entre otras irregularidades, cuestionando directamente

la competencia económica y hasta la integridad, de quienes dirigen el aparato estatal.

Existe, además, una fuerte percepción de clientelismo, donde se critica que mientras se cierran servicios críticos por supuesta falta de financiamiento, se mantienen contrataciones de personal con sueldos elevados por afinidades políticas, agravando la indignación de los usuarios.

Una red en tensión y dismantelada

Aunque la Cormupa asegura que los flujos de atención se mantienen estables -con el SAR Dr. Juan Damianovic operando las 24 horas y los SAPU Mateo Bencur y Carlos Ibáñez en sus horarios habituales-, la realidad es que la red de urgencia está operando bajo una presión extrema.

Recarga en establecimientos

Si bien el discurso oficial habla de “reforzar” estos centros alternativos, lo cierto es que la medida termina recargando de manera crítica a los establecimientos que permanecen abiertos. A esto se suma un factor determinante denunciado por vecinos y extrabajadores: estos centros están operando con una menor cantidad de funcionarios debido a una serie de desvinculaciones y finalizaciones de contratos.

Esta reducción de la dotación, en un momento donde la demanda se concentra en menos puntos de atención, profundiza la crisis asistencial y deja en evidencia que la supuesta mitigación es, en la práctica, un debilitamiento progresivo de la salud primaria en Punta Arenas.